DIARIO OFICIAL.

Año XXII.

Bogotá, lunes 6 de Diciembre de 1886.

Número 6,883.

CONTENIDO.

	Págs.
PODER LEGISLATIVO.	
Consejo Nacional Legislativo—Ley 56 de 1886, por la cual se regula el ejercicio de las facultades conferidas al Presidente de la República por el artículo 119, inciso 6.º de la Constitución.....	1,301
Ley 57 de 1886, por la cual se concede un auxilio al Distrito de Zipaquirá.....	1,301
Ley 58 de 1886, que autoriza al Gobierno para auxiliar la construcción de un camino de herradura entre la ciudad del Socorro y el río Carare.....	1,301
Ley 59 de 1886, por la cual se dan autorizaciones al Gobierno para la construcción de una obra pública.....	1,301
Ley 60 de 1886, por la cual se ordena la fundación de dos Escuelas de minas.....	1,301
Ley 62 de 1886, por la cual se declaran libres del pago del derecho de importación ciertos efectos.....	1,301
Informes de Comisiones.....	1,302
CONSEJO DE ESTADO.	
Acta de instalación.....	1,303
MINISTERIO DE GOBIERNO.	
Estado de las líneas telegráficas.....	1,303
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	
Correspondencia y resolución referentes al allanamiento de edificios pertenecientes a la Compañía del Canal Interoceánico.....	1,303
MINISTERIO DE HACIENDA.	
Rectificación.....	1,304
MINISTERIO DE GUERRA.	
Filiación de Manuel Méndez (a) Chillón.....	1,304
PODER JUDICIAL.	
Corte Suprema de justicia—Autos.....	1,304
Avisos oficiales.....	1,304

Poder Legislativo.

CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO.

LEY 56 DE 1886
(18 DE NOVIEMBRE)

por la cual se regula el ejercicio de las facultades conferidas al Presidente de la República por el artículo 119, inciso 6.º de la Constitución.

El Consejo Nacional Legislativo

DECRETA :

Art. 1.º El Presidente de la República podrá ejercer libremente las facultades que le confiere el artículo 119, inciso 6.º, de la Constitución, respecto de reos sentenciados con arreglo á la legislación particular de cada Departamento ó al Código Penal de Cundinamarca, parcial y transitoriamente adoptado para toda la República por el artículo J de la Constitución.

En caso de conmutación de la pena de muerte, precederá dictamen del Consejo de Estado.

Art. 2.º Cuando un Tribunal Superior imponga la pena de muerte con arreglo al Código de Cundinamarca mencionado, podrá pedir la conmutación de ella al Presidente de la República.

Art. 3.º Después que se haya unificado la legislación nacional, se observarán las reglas establecidas en los siguientes artículos.

Art. 4.º Si la Corte Suprema confirma una sentencia de muerte, podrá pedir la conmutación al Presidente de la República.

Art. 5.º Si un reo condenado á muerte se conforma con la sentencia, y el Ministerio público no interpone recurso de casación, el Tribunal sentenciador podrá pedir la conmutación al Presidente de la República.

Art. 6.º El Presidente de la República dispone del término de veinte días para acordar la conmutación de la pena capital.

Art. 7.º El Presidente de la República conmutará la pena de muerte si el dictamen del Consejo de Estado fuere favorable. Si no lo fuere, decidirá el punto según su propio juicio.

Art. 8.º El Presidente de la República, previa solicitud elevada por el Tribunal que sentenció en última instancia, y fundada en informe del Director del respectivo establecimiento de castigo, podrá, si lo estima conveniente, disminuir de la quinta á la tercera parte del tiempo de la condena á los reos que sufran pena corporal, si durante las dos terceras partes de dicho tiempo no han tratado de fugarse y observado además conducta ejemplar.

Esta disposición será fijada en los respectivos establecimientos de castigo.

Art. 9.º El Presidente de la República podrá, en cualquier tiempo, previo dictamen del Consejo de Ministros, conceder indultos personales por delitos políticos.

Dada en Bogotá, á trece de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Presidente, **JUAN DE D. ULLOA**—El Vicepresidente, **JOSÉ MARÍA RUBIO FRADE**—El Secretario, **Julio A. Corredor**—El Secretario, **Roberto de Narváez**.

Gobierno Ejecutivo—Bogotá, 18 de Noviembre de 1886.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.) **J. M. CAMPO SERRANO.**
El Ministro de Gobierno,
ARISTIDES CALDERÓN.

LEY 57 DE 1886
(18 DE NOVIEMBRE)

por la cual se concede un auxilio al Distrito de Zipaquirá.

El Consejo Nacional Legislativo

DECRETA :

Art. 1.º Auxiliase al Distrito de Zipaquirá con la cantidad de cuatro mil pesos anuales para el fomento del Hospital, Casa de huérfanos, y conclusión del templo, existentes en la cabecera del mismo Distrito.

Art. 2.º Dicho auxilio se pagará al Tesorero de la Municipalidad del mismo Distrito, en la Administración de Salinas, por mensualidades y se considerará incluido en el Presupuesto nacional de Gastos.

Dada en Bogotá, á 13 de Noviembre de 1886.

El Presidente, **JUAN DE D. ULLOA**—El Vicepresidente, **JOSÉ MARÍA RUBIO FRADE**—El Secretario, **Julio A. Corredor**—El Secretario, **Roberto de Narváez**.

Gobierno Ejecutivo—Bogotá, 18 de Noviembre de 1886.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.) **J. M. CAMPO SERRANO.**
El Ministro de Gobierno,
ARISTIDES CALDERÓN.

LEY 58 DE 1886
(19 DE NOVIEMBRE)

que autoriza al Gobierno para auxiliar la construcción de un camino de herradura entre la ciudad del Socorro y el río Carare.

El Consejo Nacional Legislativo

DECRETA :

Art. 1.º Autorízase al Gobierno para hacer á la persona ó compañía que tome á su cargo la construcción de un camino de herradura que ponga en comunicación

directa la ciudad del Socorro con el río Carare, atravesando la cordillera de *Cobarde*, frente á la misma ciudad del Socorro, las concesiones siguientes:

- 1.º Hasta cien mil hectáreas de tierras baldías, á título gratuito, de las que haya disponibles al Occidente de la expresada cordillera.
- 2.º Exención de derechos de Aduana y peajes nacionales, para las máquinas, herramientas y demás utensilios que del extranjero se introduzcan con destino á la construcción del camino.
- 3.º Derecho de preferencia, por seis años, para las adjudicaciones de terrenos baldíos, en una zona de ocho leguas, cuya línea central será el mismo camino.

Este derecho se refiere únicamente á las adjudicaciones imputables á las cien mil hectáreas de la concesión; y no afectará derechos de terceros, adquiridos por actos anteriores á la celebración definitiva del contrato sobre apertura de la vía.

4.º Una guarnición militar (si el Gobierno lo estimare conveniente) hasta de cincuenta hombres, mientras sea necesaria para la seguridad de los trabajos del camino y de los colonos que se establezcan dentro de la zona expresada, como también de sus propiedades.

Art. 2.º El contrato que se celebre sobre las bases de esta ley, no requiere para su validez posterior aprobación legislativa; pero será sometido por el Gobierno en consulta al Consejo de Estado.

Art. 3.º Las adjudicaciones de terrenos baldíos que se concedan á los empresarios de este camino, se harán por cuotas proporcionales, á medida que se vayan entregando terminadas y en perfecto estado de servicio las secciones en que se divida el camino; y de tal modo que la adjudicación completa y definitiva de las cuotas que se hayan estipulado, no tendrá lugar sino á la terminación y entrega de toda la obra.

Dada en Bogotá, á trece de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Presidente, **JUAN DE D. ULLOA**—El Vicepresidente, **JOSÉ MARÍA RUBIO FRADE**—El Secretario, **Julio A. Corredor**.
El Secretario, **Roberto de Narváez**.

Gobierno Ejecutivo—Bogotá, Noviembre 19 de 1886.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.) **J. M. CAMPO SERRANO.**
El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de Fomento,
ANTONIO ROLDÁN.

LEY 59 DE 1886
(23 DE NOVIEMBRE)

por la cual se dan autorizaciones al Gobierno para la construcción de una obra pública.

El Consejo Nacional Legislativo

DECRETA :

Art. 1.º Autorízase al Gobierno para destinar hasta quinientos mil pesos (\$ 200,000) á la construcción de las obras necesarias para defender la ciudad de Cartagena contra las invasiones del mar.

Art. 2.º La inversión de las sumas que se apliquen á tales obras, en virtud de las autorizaciones de esta ley, se hará bajo la inmediata vigilancia del Gobernador del Departamento de Bolívar y en la forma que determine el Gobierno.

Art. 3.º El Gobierno podrá contratar los servicios de un ingeniero holandés para que sirva como Ayudante del ingeniero en jefe de las obras de defensa á que se refiere esta ley.

Dada en Bogotá, á veintidós de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Presidente, **JUAN DE D. ULLOA**—El Vicepresidente, **JOSÉ MARÍA RUBIO FRADE**—El Secretario, **Roberto de Narváez**—El Secretario, **Julio A. Corredor**.

Gobierno Ejecutivo—Bogotá, 23 de Noviembre de 1886.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.) **J. M. CAMPO SERRANO.**
El Ministro de Hacienda, Encargado del Despacho de Fomento,
ANTONIO ROLDÁN.

LEY 60 DE 1886
(20 DE NOVIEMBRE)

por la cual se ordena la fundación de dos Escuelas de minas.

El Consejo Nacional Legislativo

DECRETA :

Art. 1.º Establécense dos Escuelas de minas, que deberán abrirse, una en la ciudad de Ibagué y otra en el lugar del Departamento de Antioquia que designe el Gobierno.

Art. 2.º Para el sostenimiento de estas Escuelas se destina la suma de veinte mil pesos anuales, y además diez mil pesos, por una sola vez, para los gastos de instalación.

Art. 3.º El Gobierno queda autorizado para organizar las dos Escuelas, para determinar el número de empleados y cateóricos que debe haber en cada una, y para señalar el sueldo de que deban gozar unos y otros.

Art. 3.º El Gobierno queda autorizado para organizar las dos Escuelas, para determinar el número de empleados y cateóricos que debe haber en cada una, y para señalar el sueldo de que deban gozar unos y otros.

Dada en Bogotá, á diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Presidente, **JUAN DE D. ULLOA**—El Vicepresidente, **JOSÉ MARÍA RUBIO FRADE**—El Secretario, **Roberto de Narváez**—El Secretario, **Julio A. Corredor**.

Gobierno Ejecutivo—Bogotá, Noviembre 20 de 1886.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.) **J. M. CAMPO SERRANO.**
El Ministro de Instrucción Pública,
JOSÉ DOMINGO OSPINA C.

LEY 62 DE 1886
(22 DE NOVIEMBRE)

por la cual se declaran libres del pago del derecho de importación ciertos efectos.

El Consejo Nacional Legislativo

DECRETA :

Art. 1.º Decláranse libres del pago de los derechos de importación los siguientes artículos destinados al servicio público de la ciudad de Cartagena:

Cuatro muestras de vidrio traslúcido de un metro y cincuenta centímetros; Treinta y seis vidrios ordinarios de color rojo, propios para los faroles del alumbrado público.

Art. 2.º La primera autoridad política del Distrito cuidará de que á los efectos referidos se les dé la aplicación á que están destinados, debiendo dar cuenta en oportunidad al Gobierno.

Art. 3.º Decláranse también libres del pago de derechos de importación todos los efectos ó objetos destinados para el uso de Hospitales ó Casas de piedad, ó de Establecimientos de beneficencia y de educación que se hallen á cargo de las Hermanas de la Caridad, ó para el uso personal de éstas, siempre que tales Casas ó Establecimientos sean públicos ó cedan en be.

eficio del público a juicio del Gobernador el respectivo Departamento, cuya certificación será suficiente para que la exención se haga efectiva.

Art. 4.º Extiense asimismo del pago de derechos de importación un reloj y un órgano para el uso de la iglesia parroquial de Santa Rosa de Viterbo, en el Departamento de Boyacá.

Dada en Bogotá, á diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Presidente, JUAN DE D. ULLOA—El Vicepresidente, JOSÉ MARÍA RUBIO FRADE—El Secretario, Julio A. Corredor—El Secretario, Roberto de Narváez.

Gobierno Ejecutivo—Bogotá, Noviembre 22 de 1886.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.) J. M. CAMPO SERRANO.

El Ministro de Hacienda,

ANTONIO ROLDÁN.

INFORMES DE COMISIONES.

HH. Delegatarios.

La ley 44 de 1883, expedida por la Asamblea Legislativa del Estado de Panamá, dispuso que "el Poder Ejecutivo procediese á contratar, dentro del término de treinta días, con el Sr. A. T. Douglas y sus asociados, la construcción de un ferrocarril urbano, usando del motor que creyese conveniente," sobre las bases allí expresadas; y autorizó además al mismo Poder Ejecutivo para contratar con el Sr. Juan C. Stevenson, dentro del mismo término, "la construcción de un ferrocarril ó ferrocarriles urbanos." La primera de las disposiciones hacía la concesión sobre "la ciudad, de Panamá y sus suburbios y alrededores, esto es, todo el distrito de la ciudad," y la segunda sobre "toda la isla de Manzanillo, el nuevo barrio de Cristóbal Colón y los que en adelante se le agregasen."

El Doctor Felipe F. Paúl, en representación de la Compañía del Ferrocarril de Panamá y de la Universal del Canal Interoceánico, y en su propio nombre, denunció ante la Corte Suprema federal la ley expresada, como contraria á las leyes nacionales que habían aprobado los contratos celebrados con aquellas sociedades por el Gobierno de Colombia. La demanda de nulidad fué apoyada por el Procurador general de la Nación; pero no habiéndose reunido la unanimidad de votos necesaria en la Corte Suprema, para la suspensión del acto, aquel Tribunal dejó subsistente la ley; y hoy, por virtud del artículo 1 de la Constitución, toca al Consejo declarar su validez ó nulidad, y á nuestra Comisión de inspección presentarnos su parecer.

De las razones aducidas por la mayoría de la Corte para decidir la suspensión de la ley, bastaría la que se funda en la lectura del artículo 2.º del contrato celebrado por el Gobierno de la Unión Colombiana con la Compañía del Ferrocarril de Panamá, contrato que fué aprobado por la ley 45 de 16 de Agosto de 1867. Dicho artículo dice:

"Art. 2.º El Gobierno de la República se compromete, durante el tiempo que permanezca vigente el privilegio exclusivo que se concede á la Compañía para la explotación del ferrocarril á no construir por sí, ni á conceder á persona ó Compañía alguna, por cualquier título que sea, la facultad de establecer ningún otro camino de carriles de hierro en el Istmo de Panamá....."

Los términos de esta concesión son tan claros y comprensivos, que, cualesquiera que sean las conveniencias públicas que consulte la ley denunciada, y cualesquiera las ventajas y condiciones del privilegio otorgado para la apertura del Canal, excluyen todo derecho á construir caminos de carriles de hierro en el Istmo de Panamá, y con mayor razón á ferrocarriles como los de que trata la ley 44 de 1883.

Reproduce, por tanto, nuestra Comisión los fundamentos en que se apoyó la mayoría de la Corte Suprema para considerar nulo el acto legislativo expresado, y os hace notar que refiriéndose este acto á un ramo de Gobierno en que tenían competencia los extinguidos Estados, debe considerarse vigente y surtiendo la plenitud de sus efectos, mientras no sea anulado por el Consejo.

Por tales consideraciones, nuestra Comisión tiene el honor de proponeros el siguiente proyecto de resolución:

"El Consejo Nacional Legislativo, en ejercicio de la facultad que le confiere el

artículo 1 de la Constitución, declara definitivamente nula la ley 44 de 3 de Diciembre de 1883, expedida por la Asamblea Legislativa del Estado soberano de Panamá. "Comuníquese esta resolución á quienes corresponda, y publíquese; y devuélvase el expediente á la Corte Suprema."

HH. Delegatarios.

Bogotá, Noviembre 7 de 1886.

JOSÉ MARÍA RUBIO FRADE—CARLOS CALDERÓN REYES—JESÚS CASAS ROJAS.

Secretaría del Consejo—Bogotá, Noviembre 19 de 1886.

Se consideró en primer debate y fué aprobado. Póngase en el orden del día de mañana para segundo y último debate.

Roberto de Narváez.

Noviembre 20 de 1886.

Se consideró en segundo y último debate y fué aprobado el proyecto de resolución precedente.

Cúmplase.

Roberto de Narváez.

HH. Delegatarios.

El Gobernador del Departamento de Cundinamarca ha celebrado con la Compañía del Ferrocarril de la Sabana un contrato adicional al ajustado ya para la realización de esta empresa, en el cual se ha convenido que el Departamento deja en poder del Gobierno nacional las cantidades que éste le adeude por cualquier motivo, y que el Gobierno respalda los bonos del Ferrocarril que no alcancen á ser amortizados hasta la concurrencia de \$ 83,333 por semestre con las rentas departamentales destinadas al efecto.

Como por este contrato contrae la República una obligación á cuyo cumplimiento no podría comprometerla el Gobierno, el Ministerio de Fomento lo ha remitido al Consejo para que se le tome en consideración, y por ese motivo os toca decidir si el convenio citado debe ó no llevarse á efecto.

En concepto de nuestra Comisión, el contrato expresado merece la aprobación del Consejo. El se refiere á la realización de una empresa cuyos resultados no son difíciles de prever. Si el Gobierno comprometiérase por las obligaciones del contrato alguna parte de sus recursos, ella no será, por una parte, onerosa, ni por otra, constituirá auxilio á obras cuya naturaleza y buen éxito sean dudosos.

Es un hecho notorio que la obra del Ferrocarril cuenta con elementos considerables. Puede asegurarse que si la Compañía que la ha contratado, consultando su propio interés consagra á ella todos los posibles esfuerzos, la empresa quedará concluida en el curso de dos años, y nos habremos colocado en situación de tener pronto prolongada la línea al río Magdalena.

Nuestra Comisión cree conveniente hacer os notar que la garantía de los bonos es el único apoyo de la Nación á la empresa; y que no sería contrario á la equidad el dar á la Compañía constructora la seguridad de que otra empresa rival más favorecida no pudiese hacerle una competencia ruinosa.

Por estas consideraciones nuestra Comisión os presenta el adjunto proyecto de "ley que aprueba un contrato relativo al Ferrocarril de la Sabana," y os pide que le deis primer debate.

HH. Delegatarios.

CARLOS CALDERÓN REYES.

Bogotá, Noviembre 17 de 1886.

PROYECTO DE LEY que aprueba un contrato relativo al Ferrocarril de la Sabana.

El Consejo Nacional Legislativo,

Visto el contrato número 36 "reformativo del marcado con el número 34 sobre amortización de los bonos del Ferrocarril de la Sabana," celebrado entre el Secretario de Hacienda del Departamento de Cundinamarca y los Sres. C. & L. Tanco, Demetrio Paredes, Ricardo Gaitúa y Carlos Tanco, contrato que á la letra dice:

(Aquí el contrato).

DECRETA:

Artículo único. Apruébese el preinserto contrato.

Dada &

Presentado al H. Consejo por el infrascripto Delegatario, en desempeño de una comisión, en 17 de Noviembre de 1886.

CARLOS CALDERÓN REYES.

Secretaría del Consejo—Bogotá, Noviembre 18 de 1886.

Se consideró en primer debate y fue aprobado. Pasó al H. Sr. Paúl para segundo. Regístrese, cópiese para la imprenta y repátese.

Brigard.

Es copia—El Oficial Mayor,

Manuel Brigard.

HH. Delegatarios.

S. S. el Ministro de Relaciones Exteriores dirigió al Consejo una nota fechada á 27 de Octubre último, número 2,745 de la Sección 1.ª, en la cual manifiesta que habiéndose reunido en París el 16 de Octubre de 1882 una conferencia internacional destinada, entre otros objetos, al estudio de las medidas relativas á la protección de los cables submarinos, y habiendo asistido á ella como representante de Colombia el Cónsul general de la República en París, Sr. Dr. José Triana, designado para ello por nuestra Legación en Francia, la conferencia citada firmó el 14 de Marzo de 1884 una "Convención internacional para la protección de los cables submarinos," la cual fué también firmada por el expresado Sr. Triana, después de haber sido confirmado en su carácter de representante de Colombia para aquel efecto.

Por causa de la última guerra que impidió la reunión ordinaria del Congreso, el Gobierno de Colombia no pudo ratificar en tiempo dicha convención, y ha sido excluido de ella, quedándole sin embargo un recurso do que se hablará más adelante.

S. S. acompaña un ejemplar original de aquel documento á fin de que el Consejo decida en vista de él si sería conveniente y provechoso para la República el adherirse á la Convención de 14 de Marzo de 1884. En caso afirmativo, S. S. ofrece presentar al Consejo un proyecto de ley destinada á dar protección á los cables submarinos en Colombia, la cual debe hacerse conocer del Gobierno de Francia.

La Comisión encargada de estudiar este asunto se permite hacer notar, ante todo, que los temores que S. S. expresa de que Colombia pueda quedar excluida definitivamente de la Convención si no notifica su intención de formar parte de ella, conforme á su artículo 16, antes del 1.º de Enero de 1887, no tienen fundamento en los documentos pasados al Consejo, pues de ellos resulta que, aunque las ratificaciones de dicha Convención deberían haber sido canjeadas en París dentro de un año desde la fecha en que fué firmada, según el artículo 17, por el 14 se reserva á los Estados que no fueron signatarios el derecho de adherirse á dicha Convención; adhesión que será notificada al Gobierno francés y por éste á los otros Gobiernos signatarios. El artículo 16 citado por S. S., se refiere á la fecha en que comenzarán á ponerse en ejecución las estipulaciones del pacto, y al período en que éste durará en vigor, lo mismo que á los resultados que producirá su denuncia por alguna de las partes contratantes.

Si no lo quedara á Colombia, que fué signataria de dicha Convención, el recurso concedido á todos los Estados que no lo fueron, inútil sería que el Consejo se ocupara en este asunto en estos momentos, pues ni alcanzaría á expedir la ley de la materia, ni habría tiempo para hacer llegar á París la ratificación correspondiente.

La citada Convención tiene por objeto, como queda dicho, proteger los cables submarinos legalmente establecidos y que tocan en los territorios de las partes contratantes.

Para lograr ese objeto se comprometen ellas: 1.º á declarar que el daño causado voluntariamente ó por negligencia á dichos cables, constituye un hecho punible, sin perjuicio de la acción civil; 2.º á establecer las condiciones de seguridad convenientes cuando autoricen la fijación de un cable en su territorio; 3.º á hacer que los daños que cause el propietario de un cable á otros cables sean de cargo del autor del daño; 4.º á hacer que los buques que se ocupen en la instalación ó reparación de un cable, observen ciertas reglas establecidas por medio de señales para impedir los abordajes, reglas y señales que deberán ser respetadas también por los buques pescadores; 5.º á conceder el derecho de indemnización á los propietarios de buques y á los pescadores que preben, con ciertas formalidades, que por no dañar un cable submarino han perdido una ancla, ó cualquiera instrumento de pesca; 6.º á establecer que los Tribunales competentes para conocer de las infracciones de la Convención, serán aquellos del país al cual pertenezca el buque autor de la in-

fracción; 7.º á declarar que el procedimiento contra las infracciones que se refieren á la ruptura ó daño de un cable, y á los relativos á la distancia que deben guardar los buques de las boyas que indican la posición de un cable, su ruptura ó el estado de reparación en que se encuentre, se hace por el Estado mismo ó en su nombre; 8.º á determinar el procedimiento por medio del cual serán probadas las infracciones de la Convención y á facultar á determinados comandantes de navíos para exigir, los documentos que prueben la nacionalidad del buque que haya causado, ó se crea que ha causado, daño á un cable submarino, pudiendo establecer en este caso procesos verbales de acuerdo con las fórmulas usuales y en el idioma del país á que pertenezca el oficial actuador, sin que esto obste para que los inculcados y los testigos tengan el derecho de excusarse y de dar sus declaraciones en su propia lengua; 9.º á proponer á las Legislaturas respectivas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Convención, y principalmente para establecer las penas de prisión ó de indemnización contra los infractores; 10. á comunicarse las leyes que sobre esto particular dicten las Legislaturas de los respectivos Estados; y 11. á declarar que las estipulaciones de la Convención no coartan la libertad de acción de los beligerantes.

Son estas las principales estipulaciones de la convención firmada en París: su simple lectura deja el convencimiento de que el objeto principal que se han propuesto las potencias contratantes es el de sancionar un Código de policía marítima destinado especialmente á proteger los cables submarinos, que son hoy para el comercio y para las relaciones sociales del mundo como las grandes arterias que mantienen en circulación la sangre del cuerpo humano.

Colombia, más por su posición geográfica que por la importancia de su comercio y de esas relaciones, está favorecida con el establecimiento del cable; su pobreza misma y su carencia absoluta de marina hacen en el presente caso que al formar parte de la Convención internacional citada, derive todas las ventajas sin exponer á sus nacionalidades á las penas establecidas por ese Código de policía marítima. Las disposiciones que dicte sobre el particular tendrán aplicación práctica únicamente en sus aguas territoriales y respecto de los buques extranjeros que llegan á sus costas, pues en cuanto á lo que se refiere á colombianos, su misión queda reducida á impedir que las pequeñas embarcaciones que se ocupan en el comercio costanero, y las balandras de sus pescadores, se acerquen á los cables submarinos de manera de causarles daño.

La Comisión, en virtud de lo que queda expuesto, somete á vuestro dictamen el siguiente proyecto de resolución:

"Dígase á S. S. el Ministro de Relaciones Exteriores, en respuesta á su nota de la Sección 1.ª, número 2,745, fecha 27 de Octubre último, que el Consejo Nacional repudia como conveniente y provechoso la adhesión de la República á la Convención internacional firmada en París á 14 de Marzo de 1884, relativa á la protección de cables submarinos; y que prestará pronta atención al proyecto de ley que S. S. ha ofrecido presentarle sobre la materia.

"Devuélvase al Ministerio de Relaciones Exteriores los documentos conexados con este asunto, y pídesele asimismo copia del presente informe."

HH. Delegatarios.

Bogotá, Noviembre 22 de 1886.

FELIPE F. PAÚL.

Secretaría del Consejo—Noviembre 22.

Se aprobó el proyecto de resolución que antecede.

Cúmplase.

Corredor.

Es copia.

R. de Narváez.

HH. Delegatarios.

Nuestra Comisión encargada de estudiar para segundo debate el proyecto de ley "que aprueba el convenio hecho el 26 de Mayo de 1883 entre el Secretario de Relaciones Exteriores y la Casa comercial de Cano, Dugand & Compañía," ha leído el expediente donde obra ese convenio y ha visto que esos Sres. reclaman con fecha 16 de Diciembre de 1881, por vía de expropiaciones, empréstitos y perjuicios que sufrieron durante la guerra que tuvo lugar en el extinguido Estado del Magdalena el año de